



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1989/SR.14
12 de julio de 1989

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

45° período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 14a. SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el miércoles 8 de febrero de 1989, a las 15 horas.

Presidente: Sr. BOSSUYT (Bélgica)

SUMARIO

Violaciones de los derechos humanos en el Africa meridional: informe del
Grupo Especial de Expertos (continuación)

Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la
asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta a los
régimenes colonialistas y racistas del Africa meridional (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,
incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse,
dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a
la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de
las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas del presente período de
sesiones se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la
clausura del período de sesiones.

SUMARIO (continuación)

Aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (continuación)

Estudio, en colaboración con la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, sobre los medios para lograr la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con el apartheid, el racismo y la discriminación racial (continuación)

Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.20 horas.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFRICA MERIDIONAL: INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS (tema 6 del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/8, 49 y 60)

CONSECUENCIAS ADVERSAS QUE TIENE PARA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS LA ASISTENCIA POLITICA, MILITAR, ECONOMICA Y DE OTRA INDOLE QUE SE PRESTA A LOS REGIMENES COLONIALISTAS Y RACISTAS DEL AFRICA MERIDIONAL (tema 7 del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/3, E/CN.4/1988/6 y Add.1; E/CN.4/Sub.2/1988/45 - capítulo I, secc. A, proyecto de resolución II)

APLICACION DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID (tema 16 del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/31 y Add.1 a 11, E/CN.4/1989/32 y 33; E/CN.4/1989/NGO/2)

ESTUDIO, EN COLABORACION CON LA SUBCOMISION DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONES Y PROTECCIÓN A LAS MINORIAS, SOBRE LOS MEDIOS PARA LOGRAR LA APLICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL APARTHEID, EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL (tema 17 a) del programa) (continuación) (E/CN.4/Sub.2/1985/6 y Corr.1 y E/CN.4/Sub.2/1985/7; E/CN.4/Sub.2/1988/5)

APLICACION DEL PROGRAMA DE ACCION PARA EL SEGUNDO DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL (tema 17 b) del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/34 y 35; E/1988/8, E/1988/9 y Add.1 y 2 y E/1988/10; A/43/631, 637 y 644; A/C.3/43/CRP.1)

1. El Sr. BALANDA, Presidente/Relator del Grupo de Especial de Expertos sobre el Africa Meridional, presentando el informe del Grupo de Trabajo sobre el período comprendido entre marzo de 1988 y enero de 1989, dice que la Comisión ha pedido al Grupo de Trabajo que siga investigando y estudiando las políticas y prácticas que violan los derechos humanos en Sudáfrica y Namibia y que presente las recomendaciones convenientes. Además, el Consejo Económico y Social le pidió que estudiase la situación en lo que se refiere a los derechos sindicales en Sudáfrica y que informase al respecto.

2. El informe actual se basa en datos obtenidos sobre el terreno durante la misión investigadora, realizada por el Grupo de Trabajo en julio y agosto de 1988, y en el gran volumen de documentación facilitada por particulares o por órganos con los que ha cooperado el Grupo de Trabajo. El orador manifiesta su agradecimiento a todos los que auxiliaron al Grupo de Trabajo y especialmente a los Gobiernos de Angola, Zambia, Zimbabwe y Tanzania, que le autorizaron a llevar a cabo sus investigaciones partiendo de sus respectivos territorios.

3. En el curso de 24 reuniones celebradas localmente, el Grupo escuchó a 59 testigos, cifra no igualada hasta entonces; algunos de ellos habían atestiguado en sesiones públicas por lo que permitieron que se revelase su identidad.

4. Se han introducido algunas innovaciones en cuanto a la presentación del informe, a la luz de una evaluación de los métodos de trabajo. El Grupo de Trabajo destacó primeramente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales aplicables a las situaciones estudiadas, haciendo resaltar el hecho de que Sudáfrica no está exenta de la obligación de observar todas las normas internacionales que prohíben cualquier modalidad de discriminación racial. También señaló que las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos deben ser reconocidas como principios generales del derecho internacional, ya que fueron aceptadas por un número muy grande de Estados y organizaciones internacionales.

5. Seguidamente, el Grupo de Trabajo decidió que debía hacerse una distribución más amplia de sus informes para que la comunidad internacional estuviese más enterada de las realidades del apartheid y de sus consecuencias, por eso sugirió que su informe fuese examinado también por la Asamblea General a fin de que llegase a un público más numeroso.

6. Finalmente, el informe actual se diferencia de los anteriores en que hace referencia a la cuestión de los refugiados para poner de manifiesto otro efecto significativo del apartheid.

7. En lo que se refiere a Sudáfrica, el período que se examina está caracterizado por la prórroga del estado de emergencia que sigue originando nuevos brotes de violencia, y ha dado lugar a numerosos abusos de autoridad. Estudiantes y sindicalistas han sufrido represiones masivas, mientras que la aplicación renovada de la política de traslados forzados de población ha dado lugar a enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad. Se han aplicado nuevas restricciones a la libertad de expresión, con limitaciones a las actividades de periodistas sudafricanos y corresponsales extranjeros. Se ha informado acerca de un creciente número de arrestos y detenciones sin proceso de presos políticos, lo mismo que sobre el creciente empleo de la tortura y los malos tratos, particularmente contra niños. Pese a ciertas indicaciones de que el Gobierno de Sudáfrica tal vez considere la revisión de su política, el apartheid sigue estando institucionalizado en ese país.

8. En lo que atañe a Namibia, siguen produciéndose actos de represión y violaciones masivas y manifiestas de los derechos humanos fundamentales a consecuencia de la ocupación ilegal de ese territorio por Sudáfrica. Sin embargo, el Grupo celebra los recientes acontecimientos y los esfuerzos que se hacen para aplicar el Plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, con arreglo a la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. No obstante, la desaparición del Gobierno sudafricano al llegar la independencia no pondrá fin automáticamente a las diversas violaciones de los derechos humanos en ese territorio. Por eso, el Grupo recomienda que se le autorice a visitar Namibia para evaluar la situación.

9. La situación en Sudáfrica se estudia en cuatro capítulos, en el primero de los cuales se menciona la inobservancia del derecho a la vida por parte de las autoridades de Sudáfrica, y la cuestión de la detención sin proceso. Se mencionan casos de torturas y de malos tratos, casos de muertes de personas encarceladas o detenidas por la policía y la aplicación de la pena capital. También se pasa revista a la administración de justicia bajo el estado de emergencia, los procesos políticos, el trato dado a los niños y adolescentes y

las desapariciones. El capítulo II trata del apartheid, incluida la bantustanización y los traslados forzosos de población, mientras que en el capítulo III se examinan las violaciones del derecho a la educación, de la libertad de expresión, la libertad de movimiento y el derecho a la salud. Finalmente, el capítulo IV trata de las violaciones del derecho al trabajo y la libertad de asociación, y se describe la situación de los trabajadores negros, las actividades sindicales y las dirigidas contra el movimiento sindical. También se menciona la cuestión de las sanciones.

10. Hay cinco capítulos dedicados a Namibia. En ellos se tratan, respectivamente, las violaciones de derechos humanos que afectan a particulares, el derecho al trabajo y a la libertad de asociación, otras manifestaciones de políticas y prácticas que constituyen violaciones de los derechos humanos, los refugiados, e incluyen información relativa a las personas presuntamente culpables del crimen de apartheid o de una violación grave de los derechos humanos.

11. La tercera parte del informe contiene conclusiones y recomendaciones. En lo que se refiere a Sudáfrica, el Grupo de Trabajo observa que el apartheid sigue siendo una grave afrenta a la dignidad humana y una violación de los derechos humanos fundamentales, cuyos efectos se extienden más allá de las fronteras de Sudáfrica, socavan el desarrollo económico y social de los Estados de primera línea y, por lo tanto, la prosperidad de toda el Africa meridional. Además, las actividades del Gobierno de Sudáfrica han originado graves pérdidas de vidas humanas y del potencial del desarrollo en la región.

12. La resistencia organizada le ha creado una crisis sin precedentes de legitimidad al Gobierno de Sudáfrica, el cual ha utilizado una vez más las medidas más brutales, recurriendo a los amplios poderes conferidos en virtud de la prórroga del estado de emergencia. Los reglamentos de emergencia y otros tipos de legislación del apartheid han socavado la administración de justicia y la independencia del poder judicial, mientras que la censura y otras restricciones impuestas a los medios de comunicación social tergiversan la información periodística sobre la situación.

13. Las torturas y malos tratos de niños y jóvenes han continuado sin cesar, y el Grupo está convencido de que las atrocidades permitidas bajo el sistema de apartheid pueden considerarse una forma de terrorismo de Estado.

14. Los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y una elevada tasa de desempleo persisten todavía en la población negra, cuyos miembros, debido a la aplicación de diversos reglamentos sobre el apartheid, pueden verse privados de su nacionalidad, de su tierra y del acceso a la educación, de las oportunidades de empleo, de las prestaciones de la seguridad social y de la vivienda. Además, muchos de ellos están obligados a vivir en muy malas condiciones de higiene y salubridad y siguen separados de sus familias, con objeto de trabajar en los centros urbanos.

15. Los derechos sindicales han sido restringidos bajo el estado de emergencia y varios ataques terroristas contra líderes y locales sindicales no han sido investigados por la policía.

16. Es urgente que la comunidad internacional adopte medidas más resueltas para obligar al Gobierno de Sudáfrica a abandonar la política de apartheid. La abrumadora mayoría de los negros sudafricanos considera que las sanciones económicas, diplomáticas y de otra índole son la forma más eficaz de ejercer presión sobre el Gobierno para eliminar el apartheid. Para encontrar una solución pacífica se requieren conversaciones entre el Gobierno y los auténticos representantes de la mayoría negra, seguidas por el levantamiento del estado de emergencia, la revocación de la proscripción de los movimientos que luchan contra el apartheid y la puesta en libertad de todos los presos políticos.
17. El sistema de los "territorios patrios" sigue consolidándose. Además, se va intensificando la represión en estas zonas.
18. Es motivo de considerable preocupación el hecho de que con el proyecto de enmienda de la Ley de delimitación de zonas se ha descartado el propósito anunciado de suavizar la aplicación de esta Ley, quedarán sin efecto las garantías existentes contra el desahucio y podrán imponerse las sanciones más graves a los arrendatarios ilegales y a sus propietarios. Otro proyecto de ley tiene por objeto controlar el acceso de los negros a las zonas urbanas, anulando anteriores reformas e implantando un sistema aún más estricto que la legislación derogada.
19. El Grupo Especial de Expertos recomienda que la Comisión de Derechos Humanos actúe de catalizador de una acción internacional más eficaz encaminada a poner término al sistema de apartheid y a lograr que se establezca una sociedad libre, no racial en Sudáfrica. Se debería pedir al Consejo de Seguridad que imponga sanciones efectivas y aplique otros medios adecuados de presión contra el Gobierno de Sudáfrica.
20. La Comisión debería pedir que se siga negando el reconocimiento a los "territorios patrios", e instar a los Estados Miembros a combinar sus experiencias relativas a la lucha contra el apartheid y a prestar toda la asistencia necesaria a las víctimas del mismo. Análogo proceder debería pedirse a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Además, la Comisión debería dar a conocer de la forma más amplia los males del apartheid y cualquier medida que pueda adoptarse para erradicarlo.
21. La Comisión y demás órganos del sistema de las Naciones Unidas deberían hacer un llamamiento para que se conmuten las sentencias impuestas a los presos en espera de ser ejecutados por su lucha contra el apartheid.
22. La promoción de una solución negociada del problema de Sudáfrica debería seguir siendo un objetivo fundamental de la Comisión de Derechos Humanos, y debería invitarse a su Presidente a que utilice todos los medios a su alcance para que la comunidad internacional tome mayor conciencia de las consecuencias importantes de la política y práctica del apartheid. Debería prorrogarse el mandato del Grupo Especial de Expertos, procurando una mayor cooperación entre el Grupo de Trabajo y el Comité Especial contra el Apartheid.

23. En lo que se refiere a Namibia, el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que en ella la situación de los derechos humanos está regida por la política de apartheid, que todavía es aplicable de hecho. Un estado de emergencia imperante en el norte del país ha comportado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho humanitario, y el Gobierno de Sudáfrica es directamente responsable de las pérdidas de vidas humanas y de daños materiales considerables.

24. Durante el bienio 1987-1988, varias leyes sudafricanas en materia de seguridad que prevén la pena de muerte se han declarado, ilegalmente, aplicables en Namibia, aunque no se ha declarado aplicable ninguna nueva ley que limite o amplíe el ámbito de aplicación de dicha pena. El "Koevoet" sigue cometiendo atrocidades, ha habido casos de muertes en detención, se informó de la desaparición de varias personas después de su detención, y centenares de personas han sido encarceladas por motivos políticos. Varios miembros de la SWAPO fueron condenados a largas penas de prisión.

25. En todos los ámbitos existen disparidades entre las condiciones de vida de la población blanca y de la población negra, y se ha deteriorado la situación por lo que respecta a servicios sanitarios. No ha habido ninguna mejora en la situación del empleo y las actividades sindicales son controladas indirectamente por el Gobierno de Sudáfrica. Se han perpetrado numerosos ataques contra escuelas, iglesias y eclesiásticos.

26. A la luz de los recientes acontecimientos en la situación política, el Grupo Especial de Expertos recomienda que la Comisión inste a las Naciones Unidas a que mantengan su posición en lo que respecta al plan establecido para la independencia de Namibia y continúen mostrándose vigilantes para que se ponga fin a la ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica. Asimismo, antes de que comience el proceso electoral en Namibia, la Comisión debería exigir la abrogación de algunos edictos y leyes importantes.

27. La Comisión debería adoptar decisiones en las que se pida que se proclame una amnistía en favor de todos los presos políticos namibianos, antes de las elecciones, y que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia evalúe los daños materiales a fin de que el Gobierno de Sudáfrica pueda prever el pago de indemnizaciones lo antes posible. También debería autorizar al Grupo Especial para que efectúe una visita a Namibia en julio-agosto de 1989 con el fin de presentar un informe sobre la situación en materia de derechos humanos en el territorio a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social.

28. El Sr. TJIRIANGE (Observador de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) dice que las perspectivas actuales en cuanto a la independencia de Namibia nunca han sido mejores, gracias a los heroicos esfuerzos de las fuerzas de Angola, Cuba y de la SWAPO, las cuales, a raíz de una importante incursión efectuada por fuerzas racistas de Sudáfrica, obligaron a éstas a sentarse a la mesa de negociación, a mediados de 1988, en el marco de lo que vino a conocerse como conversaciones cuatripartitas. Sin embargo, la situación de Namibia permaneció tensa durante las conversaciones; en el curso de 1988 la población opuso una resistencia desconocida hasta entonces a los instrumentos de explotación y represión colonial en las esferas de la educación y el empleo.

29. Con el apoyo de padres y maestros, unos niños boicotearon las clases en protesta por la instalación de bases militares cerca de las escuelas, y el movimiento laboral organizó por simpatía una suspensión de trabajo de dos días de duración. Las autoridades, evidentemente alarmadas, implantaron varias medidas represivas, desde un desafortunado estado de emergencia, desenmascarado por investigaciones periodísticas namibianas de la implantación de la llamada Ley de protección de los derechos fundamentales, en virtud de la cual se procesó y encarceló a estudiantes por supuestas infracciones del orden público, con el pretexto de que las reuniones multitudinarias podrían menoscabar los derechos del individuo. Las leyes vigentes de detención punitiva han sido empleadas en forma similar.

30. A pesar de los adelantos diplomáticos hacia la independencia, el régimen de ocupación ha intensificado sus acciones de hostigamiento contra personas civiles y ha continuado reforzando su presencia militar en la parte septentrional del país, en una época en que cabría haber esperado una reducción. Efectivamente, esas fuerzas se dedicaron sencillamente a implantar un régimen de terror a medida que las tropas se iban retirando de Angola, conforme al acuerdo de cesación del fuego. Los informes de organizaciones de derechos humanos y de las iglesias contenían testimonios de un aumento significativo del número de atrocidades.

31. En relación con la situación de los derechos humanos en Namibia, es triste observar que en julio de 1988 fue necesario establecer allí un centro de derechos humanos para denunciar las atrocidades cometidas por los llamados organismos de seguridad; sin embargo, este centro debería estimular la sensibilidad en cuanto a las condiciones imperantes bajo la ocupación militar, y es de esperar que todas las organizaciones de derechos humanos recurrirán a esta valiosa fuente de información.

32. La situación de los derechos humanos está afectando también a la salud y bienestar tanto de las víctimas como de los agresores. Los informes de trabajadores sanitarios y sociales indican un deterioro de los niveles existentes en todos los campos sociales, pero particularmente en los aspectos educacionales y sanitarios, con crecientes muestras de problemas psicológicos -no menores entre los que han participado en atrocidades- lo que es mal presagio para futuros esfuerzos de rehabilitación.

33. Otro problema creciente en algunas partes de la región septentrional es la mayor presencia de bandidos de la UNITA, que pueden mantener conductos de abastecimiento gracias a la cooperación de las tropas de ocupación, en violación del acuerdo de cesación del fuego y de suspensión de la ayuda a la UNITA; esta última actúa libremente en esa zona, y todavía no se han instalado los dos puestos fronterizos de observación que están previstos.

34. También aumenta de manera inquietante la campaña de propaganda destinada a difamar a la SWAPO y al Plan de Paz de las Naciones Unidas, además de haber órganos represivos tales como comandos de asesinos a sueldo y grupos seudoculturales que tratan de socavar la libertad de los namibianos para decidir sobre su destino.

35. La responsabilidad de la comunidad internacional respecto de Namibia no puede terminar con la reciente firma de acuerdos sobre el Africa meridional. Es necesario mantener la vigilancia y las denuncias de atrocidades durante los próximos meses, para no ceder en los esfuerzos ni tener confianza infundada en una Potencia colonial que se retira, y que sin duda hará lo que pueda para mermar el ejercicio de la libre elección, al haber sido obligada a reconocer a regañadientes la perspectiva de una victoria de la SWAPO.

36. Por ello el orador, por conducto de la Comisión, pide a la comunidad internacional que resista la tentación de ver en la actual suspensión de hostilidades una justificación para disminuir la investigación crítica sobre la conducta del régimen de apartheid en materia de derechos humanos. Los namibianos no olvidarían fácilmente cualquier aquiescencia inconsciente a este respecto, pues ellos comprenden la realidad de la situación y ya han pagado un elevado precio por llegar hasta el umbral de la independencia, especialmente cuando las pruebas apuntan todavía a una intensificación de las violaciones.

37. La organización del orador acoge complacida las conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial de Expertos incluidas en su informe (E/CN.4/1989/8), y especialmente la sugerencia de que el Grupo de Trabajo lleve a cabo una investigación sobre el terreno de la situación en Namibia. Suscribe el llamamiento hecho por la delegación de Nigeria en el sentido de que una comisión envíe un mensaje al Consejo de Seguridad para pedirle que no reduzca los efectivos del GANUPT; semejante mensaje se necesita con urgencia.

38. La Sra. RAYNELL ANDREYCHUK (Canadá) reitera la condena que el Canadá hace del apartheid, sistema que hace mucho tiempo debería haber quedado reducido a una triste memoria. Hasta el propio Gobierno de Sudáfrica ha dejado de fingir que haya alguna manera de defender el apartheid, creado por ese país hace 40 años; sin embargo este sistema sigue arruinando las vidas de millones de sudafricanos y perjudicando a otros muchos en el Africa meridional.

39. Sudáfrica es el único país donde la discriminación racial está consagrada en las leyes y en la Constitución. La raza es el factor determinante para disfrutar de oportunidad en el ámbito económico y educacional; y lo más importante, sólo una reducida minoría racial disfruta de auténticos derechos políticos, de modo que la mayoría no tiene oportunidad real de efectuar cambios. El resultado es lo que el Primer Ministro del Canadá ha calificado de violación institucionalizada y masiva de los derechos humanos, que se llama apartheid.

40. Además de su descarada desigualdad y brutalidad, el apartheid es insidioso cuando presenta al racismo como condición normal y aceptable y trata de socavar los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Aunque el mundo la rechaza absolutamente, semejante creencia perversa plantea una amenaza directa a países como el Canadá que fueron creados sobre la base de la diversidad. No se puede permitir que el apartheid persista, no sólo por los sufrimientos que entraña, sino también porque a menudo sirve de modelo a la intolerancia.

41. El Gobierno de Sudáfrica ya no intenta justificar el apartheid ante el mundo, ni siquiera ante sus propios ciudadanos sino que, en vez de desmantelarlo, finge que ya no existe, tratando de ocultar la realidad con medidas tales como el amordazamiento de los medios de información y de otras formas de expresión, y también mediante la propaganda.
42. Es preciso que termine la violencia engendrada por el apartheid; debe ejercerse presión para lograr una transición pacífica hacia un futuro no racial y democrático. Como dijo el Primer Ministro del Canadá, el mundo entero encuentra repugnante el apartheid, y todos deben aunar sus fuerzas para ponerle fin. El Canadá ha compartido el puesto de primera línea ocupado por el Commonwealth y ha aplicado todas las sanciones acordadas por éste.
43. En la más reciente reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth, celebrada en Vancouver, se acordó ampliar, reforzar e intensificar esas medidas, y actualmente está celebrando su tercer período de sesiones en Harare un Comité de Ministros de Relaciones Exteriores para el Africa Meridional, creado con arreglo a tales medidas. El Comité ya ha llegado a la conclusión de que Sudáfrica está comenzando a sentir las consecuencias de las sanciones y de que debería alentarse a todos los países a que adoptasen el paquete de medidas del Commonwealth, especialmente aquellos que mantienen relaciones económicas importantes con Pretoria. También se podría influir significativamente actuando con mayor rigor contra la situación financiera e internacional de Sudáfrica e intensificando el embargo de armas.
44. El Canadá ha examinado sus medidas de sanción, en el marco de las actividades emprendidas por el Commonwealth; en septiembre de 1988 el Ministro de Relaciones Exteriores anunció medidas tendientes a reforzar las prohibiciones contra el comercio de productos de alta tecnología y contra los contratos oficiales con sociedades que tienen participación mayoritaria en la propiedad de empresas de Sudáfrica. Sin embargo, el año pasado aumentó el comercio de productos no incluidos en las sanciones realizado entre el Canadá y Sudáfrica; el Ministro de Relaciones Exteriores expresó inquietud sobre este aumento y celebrará reuniones con representantes de la industria.
45. La repercusión de las sanciones es a la vez psicológica y económica; muchos sudafricanos negros aceptan de buen grado los sacrificios impuestos por las sanciones, porque prueban que no se encuentran solos y que existen motivos de esperanza. Entretanto, el Gobierno del Canadá ha incrementado su asistencia a las víctimas y enemigos del apartheid; en el año que termina en marzo de 1989, ha elevado a 7,8 millones de dólares su asistencia material en forma de ayuda y medios educativos y ha comprometido 2,4 millones de dólares para fomentar el diálogo en Sudáfrica y contrarrestar la censura y la propaganda.
46. También ha contribuido con 30 millones de dólares anuales a proyectos de la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del Africa Meridional, además de una suma superior a los 100 millones de dólares anuales en asistencia bilateral a determinados países miembros de dicha Conferencia y del suministro de asistencia en forma de equipo de seguridad, de carácter no militar para proteger obras de infraestructura.

47. Dentro de Sudáfrica no hay indicios de progreso. La puesta en libertad de unos pocos presos políticos sólo sirve para indicar lo mucho que todavía queda por hacer. Hasta ahora no parece que haya disposición a reconocer que una reducida minoría no puede seguir denegando sus derechos humanos fundamentales a una mayoría. El debate actual constituye un mensaje claro al Gobierno de Sudáfrica para que adopte medidas más auténticas. Según dijo recientemente el Primer Ministro del Canadá, no hay duda de que los cambios fundamentales llegarán a Sudáfrica, pero la comunidad internacional debe cuidar de que lleguen pronto y de manera pacífica.

48. La Sra. ZELNER GONÇALVES (Brasil) dice que la discriminación racial no necesariamente desaparece o disminuye donde existen la paz, la libertad y la prosperidad y que, además, se resiste a la moral y a la racionalidad. La sociedad brasileña, multirracial, integrada y coherente, si bien no es un experimento único será difícil que tenga parangón en similares circunstancias y en la misma medida; las diferentes etnias se mezclaron hace mucho en una sociedad tolerante, en gran medida libre de distinciones o discriminaciones.

49. Es por ello que el concepto del llamado "desarrollo separado" -base del apartheid- es inaceptable para el Gobierno y para la sociedad del Brasil. La delegación de la oradora reitera con vehemencia su repudio a las prácticas del régimen racista sudafricano, y pide su completa erradicación. El Gobierno del Brasil ha acogido con agrado la firma del Protocolo de Brazzaville el 13 de diciembre de 1988, que ha dado un nuevo ímpetu a la independencia de Namibia, de conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad; espera que todas las partes interesadas se unan en el esfuerzo por lograr los objetivos pertinentes, que incluyen la completa independencia de Namibia y el respeto de la integridad territorial de Angola, y que el acuerdo promueva la eliminación del apartheid, fuente de inestabilidad para el África meridional. El Brasil desea hacer llegar al Gobierno de Angola y a los líderes de la futura Namibia independiente sus votos de paz y prosperidad.

50. La delegación del Brasil lamenta no haber podido efectuar observaciones sobre el informe contenido en el documento E/CN.4/1989/8, que no se distribuyó a tiempo, y se reserva el derecho de referirse a él más adelante. Acoge con agrado la aprobación, sin votación, de la resolución 43/134 de la Asamblea General, donde se condena vigorosamente al régimen racista de apartheid por el aumento del número de casos de encarcelamiento, tortura y trato inhumano de niños en Sudáfrica y Namibia.

51. Con respecto al tema 17 b) del programa, la delegación del Brasil apoya las medidas destinadas a promover el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, y acoge con agrado la resolución 43/91 de la Asamblea General; comparte la opinión de que se debe asignar suma prioridad a las medidas destinadas a combatir el apartheid. La delegación del Brasil está plenamente satisfecha de que, como se dice en el párrafo 4 del informe del Secretario General (E/CN.4/1989/34), el tema elegido para las deliberaciones de 1990 sea "Los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos étnicos en los países de inmigración", ya que esta cuestión ha adquirido más importancia en los últimos años.

52. Un experto brasileño intervino activamente en el Seminario celebrado en Ginebra el mes anterior sobre los efectos del racismo y la discriminación racial en las relaciones sociales y económicas entre poblaciones indígenas y Estados. Será necesario realizar una evaluación detallada de las recomendaciones de largo alcance aprobadas. El Brasil también participó activamente en la Consulta mundial sobre el racismo y la discriminación racial celebrada en Ginebra en octubre de 1988 como parte del Programa de Acción para el Segundo Decenio. Como se puede ver en el documento A/C.3/43/CRP.1, ésta fue una excelente oportunidad para presentar valiosas propuestas destinadas a incrementar la actividad internacional contra el racismo y la discriminación racial.

53. El Sr. ROMARE (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, dice que, lamentablemente, el racismo existe en la mayoría de los países del mundo, y que donde ocurre, constituye una violación de los derechos fundamentales; es por ello necesario denunciarlo y combatirlo. Sin embargo, en ningún lugar del mundo el racismo es tan sistemático, está tan generalizado, ni tan institucionalizado como en Sudáfrica. El apartheid es único porque un Gobierno minoritario ha integrado la discriminación racial en la base jurídica de la sociedad sudafricana. Por ello el apartheid es el elemento más importante de la lucha internacional contra el racismo y la discriminación racial. Es verdad que ha habido reformas en los últimos años, pero los pilares fundamentales del sistema del apartheid siguen imperturbables. Mientras la mayoría de la población sudafricana carezca de los derechos políticos fundamentales el Africa meridional no conocerá la paz.

54. La comunidad internacional tiene la obligación de manifestarse contra el apartheid y de continuar ejerciendo presión sobre el Gobierno sudafricano para que lo suprima. Si bien su víctima directa es, por supuesto, la población no blanca de Sudáfrica, los sudafricanos de raza blanca deben aceptar que ellos también resultan degradados con su diaria colaboración con el sistema, en forma voluntaria o no.

55. En ese contexto la Comisión no debe olvidar los inmensos sufrimientos de millones de civiles inocentes de los países vecinos, como por ejemplo Mozambique y Angola donde sociedades enteras han sido desgarradas por las luchas y la violencia causadas por la política sudafricana de desestabilización. Los países nórdicos les ofrecen su constante solidaridad y apoyo e instan a los demás gobiernos a que colaboren para aliviar los enormes sufrimientos de estos pueblos.

56. La situación en Sudáfrica sigue caracterizada por una sistemática política de flagrantes violaciones de los derechos humanos. Continúa imperando el estado de emergencia en todo el país. No han disminuido los arrestos arbitrarios, las detenciones sin justificación de causa ni juicio previo, las torturas y los malos tratos de los detenidos, los juicios políticos, los destierros, y otras formas de represión generalizada de los oponentes del apartheid. Desde que se impuso el estado de emergencia, en junio de 1986, se ha detenido a más de 30.000 personas sin manifestarse los cargos ni iniciarse los juicios. Más de 10.000 de ellos eran niños o adolescentes, y muchos de ellos sufrieron torturas y otros tratos degradantes durante su detención.

57. Hay dos aspectos de la situación actual que merecen una mención especial. Uno es la creciente imposición de la pena de muerte. Los países nórdicos se oponen a la pena de muerte por una cuestión de principios, y consideran que la situación en Sudáfrica es alarmante. Las ejecuciones son más frecuentes que en la mayoría de los países del mundo y muchos mueren en la horca por delitos cometidos por motivos políticos.

58. El segundo aspecto es la aplicación cada vez más frecuente de la censura. La prensa independiente se ha visto ahogada por el Gobierno y los reporteros extranjeros se ven cada vez más limitados en el ejercicio de sus deberes profesionales. Sólo se puede llegar a la conclusión de que la realidad del sistema de apartheid es tan grosera que el Gobierno sudafricano se siente obligado a esconderla. Ninguna censura podrá convencer al mundo exterior de que la situación en Sudáfrica es normal.

59. Con respecto a algunas de las atroces consecuencias del apartheid, el orador dice que según un estudio sobre la pobreza en Sudáfrica realizado por dos académicos de la Universidad de El Cabo, la mitad de la población total de Sudáfrica y más del 80% de la población de los denominados bantustanes independientes viven por debajo del nivel de subsistencia y que, en un país que exporta alimentos hay 2 millones de niños con defectos físicos producidos por falta de calorías. Miles de niños mueren por malnutrición todos los años, y la proporción de niños negros que mueren durante su primer año de vida es de ocho a diez veces mayor que la de niños blancos. Todo esto ocurre en una tierra de abundancia, que podría fácilmente proveer una vida de dignidad y de satisfacción material para todos sus habitantes, si no fuera por el sistema deformante y degradante del apartheid.

60. Los países nórdicos condenan enfáticamente el sistema de apartheid y piden que sea abolido. Repiten su llamado a una Sudáfrica democrática, no racial, con igualdad de derechos para todos sus habitantes. Se está pasando la oportunidad para que el cambio se realice pacíficamente. No corresponde a los países nórdicos presentar un plan para una Sudáfrica posterior al apartheid. Sólo los sudafricanos pueden hacerlo. Pero tienen el derecho y la obligación de ejercer presión sobre el Gobierno de Sudáfrica para que suprima el apartheid mientras todavía sea posible realizar un cambio pacífico.

61. Los países nórdicos consideran que las sanciones obligatorias amplias adoptadas por el Consejo de Seguridad son la forma más eficaz de ejercer esa presión. En espera de una acción concertada de la comunidad mundial, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta, los Gobiernos nórdicos han adoptado una amplia gama de medidas unilaterales contra el apartheid, entre ellas una prohibición general del comercio con Sudáfrica. Su postura quedó establecida en el Programa de Acción Nórdico contra el Apartheid, adoptado en marzo de 1988.

62. Los Gobiernos nórdicos esperan que otros países sigan su ejemplo y adopten medidas unilaterales contra el apartheid. El Consejo de Seguridad no debería sentirse maniatado por el actual estancamiento en lo que hace a las sanciones obligatorias. Quedan otras importantes medidas que podría tomar para manifestar su rechazo del apartheid. Por ejemplo, habría que extremar el embargo obligatorio de armas de 1977 y hacerlo más eficaz. Además, las medidas voluntarias recomendadas por el Consejo de Seguridad podrían influir considerablemente sobre la situación en Sudáfrica.

63. Las sanciones aplicadas contra los que imponen el sistema de apartheid deberán estar acompañadas del apoyo a quienes trabajan por un cambio pacífico y de la ayuda a las víctimas del apartheid. Es por ello que en los últimos años los países nórdicos -como muchos otros- han aumentado considerablemente su asistencia humanitaria y de otro tipo a Sudáfrica. Además de los programas y proyectos bilaterales son importantes contribuyentes a los proyectos regionales del SADCC. La Conferencia Internacional sobre la difícil situación de los refugiados, los repatriados y las personas desplazadas en el África meridional, celebrada en Oslo en agosto de 1988, se centró en el problema de los refugiados en el África meridional. También destacó, entre otras cosas, la necesidad de contar con programas de emergencia, programas supletorios y de alerta anticipada. Todos los miembros de la Comisión deberían apoyar el programa de acción adoptado en esa Conferencia.

64. Los países nórdicos están elaborando considerables programas de ayuda para Namibia durante el período de transición -cuando prestarán un fuerte apoyo al GANUPT- y después de la independencia, cuando esperan continuar cooperando con una Namibia soberana y democrática.

65. El papel de las Naciones Unidas se ha fortalecido, ya que las grandes Potencias están más dispuestas a utilizar a la Organización con fines constructivos. En ese clima de razón y reconciliación, los hombres y mujeres que muestren buena voluntad, coraje, sabiduría y tenacidad, podrían resolver hasta los peores conflictos.

66. El Sr. RODRIGUEZ (Perú) lee una declaración del pueblo de Sudáfrica en la que se comunica a ese país y al mundo entero que Sudáfrica pertenece a aquellos que viven en ella, negros y blancos, y que ningún gobierno puede ejercer en ella el poder a menos que cuente con la voluntad del pueblo, que los derechos serán los mismos para todos, sin consideración de raza, color o sexo, que todas las leyes y prácticas del apartheid serán anuladas; que el pueblo participará de las riquezas del país; que todos serán iguales ante la ley; y que combatirán juntos, a lo largo de sus vidas, hasta que ganen su libertad.

67. Esta plataforma programática resume la aspiración de todas las conciencias libres para hacer realidad una Sudáfrica democrática, y corresponde a la "Carta de la Libertad" que, bajo el liderazgo de Nelson Mandela -cuya libertad inmediata e incondicional exige la delegación del Perú- aprobó hace ya 29 años el Congreso Nacional Africano. No obstante los tres decenios que han transcurrido, la Carta de la Libertad sigue vigente, como sigue vigente, lamentablemente, la realidad del apartheid.

68. Oponerse al racismo en el contexto de la evolución histórica de la sociedad humana no es sólo un imperativo político. Es, esencialmente, una cuestión ética, un asunto que atañe a la condición humana, un imperativo moral que tiene que ver, en la actual coyuntura, con la capacidad material y espiritual de nuestros pueblos y gobiernos para afirmar la vigencia universal del humanismo y del principio democrático según el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

69. La disyuntiva en torno a la discriminación racial y el apartheid es clara. O se afirma la igualdad plena de los seres humanos, o se acepta y protege la distinción, exclusión o restricción basadas en motivos de raza, color, linaje u origen étnico. Ciertamente la realidad política no puede ser reducida a sólo dos opciones excluyentes, pero la ética no admite otra posibilidad. No se puede ser más o menos ético. No se puede respetar más o menos la dignidad y la condición humana. Por ello, las cuestiones del racismo y del apartheid no admiten posiciones intermedias.

70. Desde septiembre de 1952, cuando por primera vez se trató la cuestión del apartheid en las Naciones Unidas, han transcurrido más de 25 años, un cuarto de siglo en el que la lucha contra la discriminación racial y el apartheid han obtenido trascendentales realizaciones, tales como la creación del Comité Especial contra el Apartheid, la aprobación del embargo de armas contra Sudáfrica, las resoluciones sobre el embargo petrolero, la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y, especialmente, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. Se ha forjado una conciencia universal y se ha creado un ordenamiento jurídico internacional sin precedentes. Se han adoptado y recomendado sanciones, aunque aun en forma insatisfactoria, y se ha ejercido presión política. Se ha aislado relativamente al régimen racista de Sudáfrica.

71. Esencialmente, se ha eliminado la discriminación que existía en el mundo colonial y aun, en años recientes, el racismo institucionalizado que subsistía en algunas sociedades industrializadas. Y todo ello ha sido sustantivamente obra del movimiento anticolonialista y de los combates de los pueblos contra la opresión racial dentro y fuera de sus fronteras. Las Naciones Unidas han apoyado esas luchas, interpretando acertadamente su papel histórico. Pero los factores principales de la gesta antirracista y antiapartheid han sido y son los propios pueblos y sus movimientos de liberación.

72. Resulta claro así que, en la acción internacional contra el apartheid existe una obligación ética pero también una obligación jurídica, de actuar de consuno y de realizar todos los esfuerzos posibles para erradicar el apartheid. Ello implica la obligación jurídica contraria, es decir la de no proteger directa ni indirectamente al régimen racista sudafricano. Hacerlo implica violación de normas jurídicas internacionales, de normas imperativas que hacen a los principios éticos en que se funda todo el andamiaje de la convivencia social en las sociedades contemporáneas, independientemente de su sistema socioeconómico y de su grado de desarrollo.

73. En ese sentido, la cooperación financiera y comercial de algunos Estados industrializados con Sudáfrica sabotea el esfuerzo colectivo por liquidar el apartheid y contribuye a su mantenimiento. Quienes se resisten al establecimiento de las sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica no hacen sino prolongar la vida del apartheid y postergar la salida política y negociada al problema sudafricano.

74. El Gobierno sudafricano, al mantener el sistema de apartheid, se ha constituido en un Estado al margen del derecho internacional. La perversión jurídica que implica esta situación se traduce en el hecho de que el ordenamiento legal sudafricano, en el plano interno, expresa un derecho

concebido intencionalmente para afirmar los derechos de una minoría sobre la base de la violación generalizada de los derechos humanos de la mayoría. Se trata del único caso que registra la historia contemporánea en el que la violación de los derechos humanos, de manera sistemática y global, se hace aplicando las leyes internas.

75. En los últimos 12 meses han sucedido acontecimientos importantes en la realidad sudafricana. Por un lado, en Namibia se ha aceptado, gracias al acuerdo tripartito entre Cuba, Angola y Sudáfrica, la coyuntura adecuada para proceder a su independencia. En el umbral de una fase decisiva de la historia del pueblo de Namibia, que debería culminar con su independencia genuina y completa, el Gobierno y el pueblo del Perú expresan su solidaridad con el pueblo de Namibia y con la SWAPO, su legítima representante.

76. Pero el horizonte de la paz y la independencia nacional en Namibia, no obstante el entendimiento para aplicar la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad aún no está despejado de obstáculos. Es indispensable, por ello, que la presencia de las Naciones Unidas en el proceso de independencia no sea limitada ni debilitada. Es preciso también, que se decrete antes del 1° de abril una amnistía total para los presos políticos. Y será indispensable una actitud vigilante de toda la comunidad internacional para que el período de transición en Namibia obtenga las garantías necesarias para que su independencia sea total, incondicional y genuina.

77. En los últimos meses se han sucedido en Sudáfrica acontecimientos que indican tendencias de endurecimiento en la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la salud y la educación, y persisten las detenciones arbitrarias, las muertes de los detenidos y las desapariciones. Es evidente que la plena vigencia de los derechos humanos en el Africa meridional está vinculada a la legitimidad y autenticidad de la independencia de Namibia y, especialmente, a la eliminación del régimen de apartheid. La delegación del Perú espera, por lo tanto, que las tendencias positivas del actual proceso de distensión no se limiten a los focos de conflicto que atraviesan las relaciones Este-Oeste, sino que debe extenderse y abarcar los aspectos políticos, sociales, humanitarios y económicos de las relaciones Norte-Sur, y en este contexto, la erradicación del apartheid.

78. La Sra. SINEGIORGIS (Etiopía) dice que la constante violación de los derechos humanos de la población africana en Sudáfrica como consecuencia de la abominable práctica del apartheid es una de las tragedias de los tiempos modernos. La proclamación y la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una clara reafirmación de la determinación de la humanidad de poner fin a todas las formas de discriminación, incluidas las que se basan en la raza, el color, la religión o el sexo.

79. La comunidad mundial, a través de las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana y el Movimiento de Países No Alineados ha pronunciado su veredicto, condenando el apartheid y declarándolo crimen contra la humanidad. Sin embargo, a pesar de esa posición clara y firme de la comunidad de naciones y de sus esfuerzos concertados para poner fin al crimen de apartheid, la lucha contra dicho crimen todavía no ha dado los resultados esperados.

80. Prestar cualquier tipo de asistencia o apoyo, abierta o encubiertamente, al régimen racista de Pretoria equivale a perdonar el apartheid y, sin lugar a dudas, es fundamental para prolongar las prácticas racistas de opresión y crueldad de Sudáfrica. A este respecto, no se puede dejar de considerar a las empresas transnacionales que operan en Sudáfrica y en Namibia cómplices del crimen de apartheid, y es sumamente preocupante la afirmación que figura en el informe actualizado del Relator Especial (E/CN.4/Sub.2/1988/6 y Add.1) de que su número crece de año en año.

81. La situación de Sudáfrica ha seguido deteriorándose, el estado de emergencia declarado por el régimen ha entrado en su tercer año y, con la grave escalada del crimen de apartheid al amparo del estado de emergencia, el alcance y la intensidad de las insurrecciones populares han continuado aumentando. Como resultado, la mayoría africana se ha visto sometida a una opresión cada vez más severa mediante el fortalecimiento del denominado sistema de medidas de seguridad. Según la prensa, también sometida a una censura muy estricta, se encuentran detenidos más de 2.500 activistas.

82. Es también muy preocupante para la delegación de Etiopía la situación en lo que respecta a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. La oradora reitera su convicción de que es indispensable la firma y la ratificación de la Convención por tantos Estados como sea posible a fin de conseguir su aplicación plena.

83. El optimismo de la delegación de Etiopía por el acceso rápido y sin trabas de Namibia a la independencia se ha visto empañado por las continuas maniobras de Sudáfrica, que son contrarias al espíritu de los Acuerdos sobre Namibia. Se siguen produciendo atrocidades en gran escala, el toque de queda y la ley marcial siguen en vigor y prosiguen el arresto y la detención de miembros y partidarios de la SWAPO. En ese contexto, la decisión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de reducir el tamaño de la fuerza de las Naciones Unidas propuesta para Namibia es de gran preocupación para el Gobierno de Etiopía, ya que ello dejaría a Sudáfrica las manos libres para trastocar las elecciones o determinar su resultado de manera favorable a sus objetivos racistas. Por ello, la oradora hace un llamamiento a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a fin de que reconsideren su posición y cumplan su mandato histórico y sagrado para con el pueblo de Namibia poniendo a su disposición toda la asistencia posible, incluida una fuerza de las Naciones Unidas adecuada para supervisar las elecciones en el territorio.

84. El Sr. JEBARI (Marruecos) dice que el régimen racista de Pretoria está intensificando su dominación sobre la población negra mediante secuestros, asesinatos, violencia contra los manifestantes, tortura de los oponentes y detención de adolescentes. Por consiguiente, la comunidad internacional debe realizar todos los esfuerzos posibles para poner fin a las prácticas racistas del régimen de Sudáfrica y a sus ofensas contra la dignidad humana mediante la imposición de sanciones generales y obligatorias, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos.

85. El pueblo de Sudáfrica tiene derecho a la libre determinación y a establecer un Gobierno que garantice la libertad y la igualdad. Las supuestas reformas constitucionales de Sudáfrica son simplemente parte de una campaña de propaganda y no contribuyen en modo alguno a levantar el estado de emergencia o eliminar el apartheid.

86. Las conclusiones que figuran en el informe del Grupo Especial de Expertos (E/CN.4/1989/8) sitúan la política de apartheid en su contexto real, y el Gobierno de Marruecos espera que la Comisión adopte las recomendaciones del Grupo y renueve su mandato. La Comisión debe hacer un llamamiento a Sudáfrica para que colabore con el Grupo a fin de permitirle continuar su labor.

87. El Acuerdo Tripartito entre Cuba, Angola y Sudáfrica estipula que, de conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad, Sudáfrica debe poner fin a su ocupación de Namibia. La comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos que se están realizando en pro de la paz y eliminar los obstáculos que se interponen en el camino de Namibia hacia la independencia.

88. La política sudafricana de desestabilización militar, económica y política en el Africa meridional equivale a una guerra no declarada contra los Estados vecinos. A pesar de los acuerdos de no agresión con algunos de los Estados de primera línea, ninguno de ellos está a salvo de las operaciones militares de Pretoria y de sus actos de terrorismo contra civiles inocentes. Los intentos de Sudáfrica de debilitar la capacidad económica de los Estados vecinos y de hacerles dependientes económicamente son, por lo menos, tan peligrosos como sus operaciones militares y de sabotaje. A este respecto, la comunidad internacional debería aplicar el párrafo 21 de la resolución 1988/9 de la Comisión de Derechos Humanos.

89. El informe actualizado preparado por el Relator Especial (E/CN.4/Sub.2/1988/6 y Add.1) indica que la situación de los derechos humanos de la población negra es una consecuencia adversa del poderío económico del régimen de Pretoria, que reposa sobre las inversiones y el capital extranjeros. El Gobierno de Marruecos observa con satisfacción que la comunidad internacional es cada vez más consciente de la situación en Sudáfrica y que algunos Estados occidentales están intentando retirarse de Sudáfrica. Todos los Estados deberían cumplir las recomendaciones del Relator Especial, y los Estados que mantienen vínculos con el régimen de Pretoria deberían ejercer presión sobre dicho régimen para que ponga fin a su política de apartheid.

90. Marruecos es Parte en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y ha combatido constantemente el racismo donde quiera que se haya producido. No mantiene relaciones diplomáticas, políticas, económicas ni militares con Sudáfrica.

91. La comunidad internacional debería realizar todos los esfuerzos a su alcance para lograr los objetivos del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Marruecos celebra los esfuerzos de las Naciones Unidas y de sus órganos y organismos especializados por difundir información sobre la discriminación racial y proponer medios para combatir ese mal.

92. El Sr. KAMAL (Pakistán) dice que, a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas para combatir el racismo, en general, y eliminar el apartheid en Sudáfrica, en particular, el régimen de la minoría racista ha decidido persistir en su política abominable. Siguen produciéndose matanzas de inocentes y violaciones masivas de los derechos humanos. Con objeto de desviar las críticas y las presiones, el régimen de Pretoria ha reiniciado las agresiones contra los Estados de primera línea, intentando confundir a la comunidad internacional mediante gestos vanos, como el anuncio de los denominados programas de reformas para eliminar progresivamente el apartheid, y las elecciones municipales celebradas en 1988 en las que se aplicó la discriminación racial.

93. Esa política no ha conseguido confundir a la comunidad internacional ni quebrantar el indomable espíritu de los pueblos amantes de la libertad de Sudáfrica y de Namibia. La represión, la intimidación y la coerción no han hecho sino aumentar la resistencia popular e intensificar la lucha por la libertad. La moral de los movimientos de liberación de Namibia y de Sudáfrica, con el estímulo y bajo la dirección de la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y del Congreso Nacional Africano (ANC), sigue tan alta como siempre.

94. Como Miembro de las Naciones Unidas y del Consejo para Namibia, el Pakistán ha apoyado firmemente todas las resoluciones y actividades de las Naciones Unidas encaminadas a la eliminación del apartheid en Sudáfrica y a la liberación de Namibia. Además de ofrecer su solidaridad a los pueblos oprimidos de Sudáfrica y de Namibia, el Gobierno del Pakistán también ha prestado asistencia práctica y material a las víctimas del apartheid.

95. El Pakistán no mantiene relaciones diplomáticas, políticas, económicas, culturales ni deportivas, ni enlaces aéreos con Sudáfrica, y condena la violencia y las violaciones masivas de los derechos humanos que se producen en ese país. El Gobierno hace un llamamiento para la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos, incluidos Nelson Mandela y Jeff Masemola, la revocación de todas las leyes discriminatorias, incluida la ley de relaciones laborales, y la supresión de todas las restricciones que pesan sobre los movimientos sindicales.

96. La delegación del Pakistán celebra que se estén descartando teorías falsas como las del "compromiso constructivo", y que se esté tomando conciencia de la importancia de las sanciones amplias y obligatorias y de la política de desvinculación. Sin dichas sanciones económicas, no se puede aplicar plenamente un embargo de armas ni lograr los efectos deseados.

97. El Acuerdo Tripartito entre Cuba, Angola y Sudáfrica ha abierto el camino para la tan esperada independencia de Namibia, mediante la aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad. La negación del derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre determinación y a la independencia ha ocasionado graves pérdidas de vidas humanas e incalculables daños materiales en Namibia, así como la desestabilización política y económica de la región.

98. La independencia de Namibia y la eliminación del apartheid son dos frentes de una misma lucha contra un enemigo común. No se puede alcanzar la victoria en un frente a expensas de derrotas en el otro. Por el contrario, se debe mantener la lucha en ambos frentes con la misma intensidad hasta que se elimine totalmente el apartheid de la faz de la Tierra.

99. El Sr. KONATE (Senegal) dice que el informe del Grupo Especial de Expertos sobre las violaciones de los derechos humanos en Sudáfrica (E/CN.4/1989/8) contiene una descripción tremenda y despiadada de la situación de los derechos humanos en Sudáfrica, donde el régimen de Pretoria sigue desafiando a la comunidad internacional con sus actos de brutalidad y su desprecio por la dignidad de la población negra. La Comisión debe examinar la conclusión del Grupo de que el Gobierno de Sudáfrica se enfrenta a una "crisis de legitimidad sin precedentes", ya que hace tiempo que ha perdido todos los fundamentos de su autoridad, que se basa en la negación de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Carta de las Naciones Unidas.

100. La adopción de leyes represivas por el régimen de Pretoria al amparo del estado de emergencia es la mejor excusa que ha podido encontrar para imponer medidas que amenazan la seguridad de la población negra y socavan la administración de la justicia, que ya no puede garantizar la protección jurídica de la persona. Las detenciones, los encarcelamientos en condiciones inhumanas y la tortura son los mejores ejemplos de la brutalidad del régimen represivo de Pretoria. Millones de niños negros han sido víctimas de la tortura por haber manifestado, en compañía de sus padres, su deseo de libertad.

101. El sistema de apartheid también se caracteriza por actos de agresión y sabotaje contra los Estados vecinos, encaminados a anular sus esfuerzos de recuperación económica. Dichas acciones ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de toda la subregión.

102. La comunidad internacional debe adoptar medidas para imponer sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Ha quedado demostrado mediante encuestas detalladas que la población negra está convencida de la eficacia de dichas sanciones y dispuesta a cargar con las consecuencias, si ese es el precio que ha de pagar para que se reconozca su dignidad. Además, los rigores de la represión, en vez de debilitar la determinación de la población negra, han hecho surgir una nueva conciencia en Sudáfrica, incluso entre los ciudadanos blancos de ese país.

103. Un creciente número de sudafricanos blancos se ha convencido de que el apartheid no tiene futuro y de que el único medio para salvar su país es el diálogo entre las comunidades. Ese es el significado de la histórica reunión de Dakar entre representantes del ANC y blancos liberales. La delegación del Senegal también ha tomado nota de la reciente reunión de Harare entre abogados blancos y militantes del ANC, y el Gobierno está preparando la celebración de otra reunión de ese tipo en 1989. Sin embargo, esas iniciativas, para que sean eficaces, deben ir acompañadas de una creciente solidaridad por parte de la comunidad internacional. La única alternativa de la negociación es el caos, el derramamiento de sangre y la destrucción.

104. La delegación del Senegal lamenta que algunos Estados tengan dificultades legislativas y jurídicas para sumarse a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, como si se pudiera luchar contra el apartheid sólo mediante simples condenas. El Gobierno senegalés espera que la comunidad internacional dé muestras de la voluntad política necesaria para eliminar ese flagelo, dando así un paso importante en defensa de la dignidad humana. Es evidente que, cuando existe la voluntad política, la firma de la Convención es el indicador más fiable del grado de compromiso y responsabilidad de la comunidad internacional. Por ello, el orador hace un llamamiento a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho para que se adhieran a la Convención a fin de acelerar la eliminación del apartheid.

105. El apartheid, como sistema de gobierno institucionalizado, es la forma más completa de racismo, pero la Comisión también debe permanecer atenta a la supervivencia de otras formas de discriminación racial más sutiles. Todos los Estados, grupos privados, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos y religiosos y comunidades intelectuales y científicas deben realizar todos los esfuerzos posibles para informar y educar acerca del racismo y la discriminación racial, y para asegurar el éxito del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha Contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.